

249-2015

Presidencia de la República de El Salvador, Unidad de Acceso a la Información Pública: En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del veinte de noviembre de dos mil quince.

El suscrito Oficial de Información, CONSIDERANDO que:

1. El día diecinueve del mes y año en curso se recibió solicitud de acceso de información, por parte de [REDACTED], quien requiere información de la Dirección General de Centros Penales, la cual consiste en: “¿Cuántas solvencias han recibido en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015? ¿Cuál ha sido la cantidad de solicitudes atendidas por mes durante eso cinco años? ¿Cuántas solicitudes fueron tramitadas y cuántas negadas por año del 2010 al 2015? Cifra total por año. ¿Cuáles son las principales razones para negar la entrega de antecedentes penales? ¿Cuántas solicitudes tenían homónimo y debieron ser aclaradas entre los años 2010 a 2015? ¿Cuál fue la cantidad por año?”.
2. A partir del deber de motivación genérico establecido en el artículo 65 LAIP, las decisiones de los entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante, con mención breve pero suficiente de sus fundamentos.

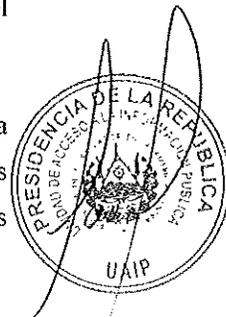
Con base a las facultades legales previamente señaladas, se hacen las siguientes consideraciones:

I. Sobre el proceso de acceso y la distribución de Unidades de Acceso a la Información Pública de los entes obligados.

A partir de la naturaleza del procedimiento de acceso a la información pública, para la correcta configuración del acto administrativo se requiere de una serie de elementos para dar cumplimiento pleno a la obligación establecida en el artículo 2 LAIP. Entre ellos la existencia de un sujeto legalmente apto para dar trámite a los requerimientos de acceso a la información pública de los interesados, lo cual únicamente puede derivar del marco de competencias atribuidas a cada uno de los entes obligados por la ley.

En tal sentido, la competencia entendida como la medida de la potestad que corresponde a cada órgano de la Administración atribuida por la ley a cada uno de los entes obligados. De manera que, la gestión de los negocios públicos pueda realizarse de manera específica, eficiente y expedita a los mandatos legales encomendados a cada institución.

Así, por ejemplo, el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (en lo sucesivo RIOE) establece la distribución funcional de las entidades que componen el Órgano Ejecutivo en Ministerios o Secretarías de Estado,



designando a cada uno de ellos un Ministro o Viceministro como titulares de esa institución, artículos 28 y 31 RIOE. En esa perspectiva, la competencia funcional de cada una de esas instituciones persigue un conjunto de objetivos diferenciados pero vinculados directamente al Presidente de la República.

De igual manera, de conformidad al artículo 46 RIOE, las Secretarías de la Presidencia como unidades adscritas directamente al servicio de la Presidencia de la República actúan como órganos de coordinación con los Ministerios y las restantes entidades adscritas al Órgano Ejecutivo. De ahí que, sus competencias funcionales difieran del resto de órganos de gobierno, siendo sus alcances limitados a lo previsto por la ley.

Por tales motivos, a partir de las competencias funcionales atribuidas a cada dependencia que conforma el Órgano Ejecutivo, las Unidades de Acceso a la Información Pública (UAIP) sólo pueden iniciar y tramitar solicitudes de acceso cuando la información requerida por los peticionarios recaiga dentro del ámbito de competencia funcional atribuida a cada institución. Siendo plausible afirmar que esta UAIP solo puede conocer de los procedimientos de acceso cuando ellos recaigan sobre información de cualquiera de las Secretarías de la Presidencia mencionadas en los artículos 46 y siguientes del RIOE, y cada una de sus respectivas unidades administrativas.

En esa línea de argumentos, como se ha señalado anteriormente en otras resoluciones emitidas por esta Unidad, a partir del artículo 102 LAIP y 20 del Código Procesal Civil y Mercantil (en adelante CPCM), los vacíos en el procedimiento de acceso a la información dirigidas a la Presidencia de la República serán suplidos por las disposiciones del CPCM. Por lo que son aplicables todas aquellas disposiciones de ese cuerpo legal relacionadas a la decisión sobre la competencia para la tramitación de un proceso, ya sea este de carácter administrativo o judicial, artículo 45 CPCM.

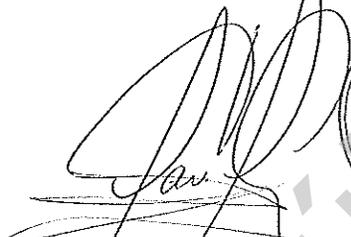
En el caso de autos, cabe señalar que la petición realizada por el señor [REDACTED] versa sobre las atribuciones establecidas a la Dirección Nacional de Centro Penales, por lo que el suscrito hace del conocimiento del peticionario que la solicitud planteada puede y debe ser evacuada en por la Dirección antes mencionado, por medio de su oficial de información Marlene Cardona Andrade, funcionaria idónea para efecto de dar cumplimiento a todas las obligaciones dispuestas en la ley de la materia y que corresponden a la Dirección General de Centro Penales.

Consecuentemente, no siendo competente esta UAIP para dar trámite a la información de mérito, corresponde declarar sin lugar el inicio del trámite de acceso a la información respecto de la pretensión de acción solicitada.

Con base a las disposiciones legales citadas y los razonamientos antes expuestos, se RESUELVE:

1. *Declárese* incompetente la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia de la República para conocer sobre la información pretendida por el señor [REDACTED], con base a lo dispuesto en los artículos 68 inciso 2º LAIP y 49 de su Reglamento.

2. *Declárese* sin lugar el inicio del procedimiento de acceso a la información pública por ser improponible según los términos descritos en los párrafos que preceden, con base en los artículos 102 LAIP, 20 y 45 CPCM
3. *Hágase* de conocimiento al señor [REDACTED] que puede interponer su solicitud de información ante la Oficina de Información y Respuesta de la Dirección General de Centro Penales, mediante escrito dirigido al Oficial de Información de dicha entidad, licenciada Marlene Cardona Andrade, ubicada en Séptima Av. Norte y Pasaje número tres, Urbanización Santa Adela, casa número uno, San Salvador, *o al correo electrónico marlene.cardona@seguridad.gob.sv*
4. *Notifíquese* al interesado en el medio y forma señalado para tales efectos.



Pavel Benjamín Cruz Álvarez
Oficial de Información
Presidencia de la República

Versión Pública